

# Protección y participación de la mujer como garantía de acceso a la justicia.

## Perspectivas México-Colombia

Wilberth Orozco González\*

Mónica Yesenia Amado Cortés\*\*

### Introducción

La participación equitativa de personas de distinto sexo en los diferentes roles de la sociedad, específicamente en los principales órganos públicos encargados de la toma de decisiones, permite tener una representación diversa que favorece el desarrollo del conjunto. Actualmente la participación de la mujer es mínima en el ámbito internacional y nacional; no obstante, los instrumentos jurídicos que establecen derechos de protección y participación de las mujeres, obligan a los Estados a tomar medidas para la inclusión de la mujer en la dirección de los principales órganos públicos.

El término protección, según la Real Academia Española, deviene del latín *protectio, -onis*, que significa acción y efecto de proteger, lo que nos lleva al latín *protegere* que se traduce en amparar, favorecer, defender a alguien o algo. Partiendo de esta idea, es significativo realizar un estudio

---

\* Abogado y Maestro por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Profesor adscrito al Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur/Universidad de Guadalajara. Correo: wilberth.orozco@cucsur.udg.

\*\* Abogada por la Universidad Católica de Colombia. Estudiante de la Maestría en Derecho PNP-C-CONACYT: 005158 del Centro Universitario de la Costa Sur/Universidad de Guadalajara. Correo: myamado28@gmail.com

que permita resaltar los instrumentos que amparan o favorecen la participación igualitaria de la mujer en los diferentes espacios.

Para ello, analizaremos desde un punto de vista de derecho comparado entre México y Colombia, los cargos que ellas ocupan en el sector público, lo cual nos permitirá dar respuesta a los siguientes interrogantes que rigen la investigación:

Las normas existentes, ¿son suficientes para garantizar la protección y participación de la mujer?

¿La participación en proporciones de igualdad de género dentro de la dirección de los principales órganos del sector público y del ámbito universitario, garantiza el pleno acceso a la justicia de las mujeres?

## Metodología

Para dar respuesta a los interrogantes anteriores, se desarrolló una investigación de tipo documental, en la que se revisaron, en el ámbito internacional, los tratados y pactos que reconocen y protegen la participación de la mujer en su sentido más amplio. Y en los ámbitos locales, se analizaron las legislaciones nacionales de México y Colombia con el fin de conocer la integración de los principales órganos públicos.

La aplicación del método descriptivo permitió determinar la composición de los principales órganos del poder público, así como establecer la estadística de participación de la mujer en la toma de decisiones. Para conocer este dato, se utilizó la siguiente fórmula:

$$\%PM = \frac{NM}{NA} \times 100$$

%PM: Porcentaje de participación de mujeres.

NM: Número de mujeres en determinado órgano público.

NA: Número total de asientos dentro de determinado órgano público.

## **Panorama actual de la protección y participación de la mujer en el ámbito internacional**

Los derechos a la protección y participación de la mujer, así como la garantía de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se encuentran reconocidos principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El 26 de junio de 1945 se firmó la Carta de la Naciones Unidas, documento que le da vida a una organización internacional que se denomina Naciones Unidas (NU). En dicha Carta, los gobiernos participantes reafirmaron la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas (Naciones Unidas, 2019).

En noviembre de 1945, México y Colombia fueron admitidos como miembros de esta organización. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuyo artículo primero afirma: que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Declaración que se establece como el principal instrumento jurídico internacional para garantizar los derechos de protección y participación de la mujer, así como el derecho de acceso a los diferentes espacios públicos y privados en los que se desenvuelve, en condiciones de igualdad (Naciones Unidas, 1948).

El derecho de participación está consagrado en el artículo 21 de la propia Declaración, el cual refiere: “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”, por lo tanto, la protección y participación son derechos que deben garantizar el acceso a la justicia en los diferentes roles que tiene la mujer en la sociedad. Flores (2006) afirma que la revolución cultural que viven las sociedades democráticas modernas tiene

su sustento en una igualdad no meramente formal, que ha generado en todo el mundo, un fenómeno social que busca la realización efectiva y pragmática de los derechos.

Lo anterior invita a reflexionar sobre el acceso a la justicia, más allá de lo que consagra el artículo décimo de la Declaración, en el cual se establece que: “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, y el segundo párrafo del artículo 21 de la Declaración que establece: “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”; para considerarse el acceso a la justicia como un “medio de aplicación de otros derechos humanos” (UNODC, 2018). En este sentido, el acceso a la justicia se debe entender como el conjunto de acciones o instrumentos jurídicos que otorgan protección y garantizan la participación igualitaria de las mujeres en los diferentes espacios públicos y privados en lo que se desenvuelve.

El 16 de diciembre de 1966 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), mediante el cual los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el propio Pacto (Naciones Unidas, 1966). El Estado colombiano firmó en diciembre de 1966 y ratificó el Tratado en octubre de 1969, en cambio, el Estado mexicano lo ratificó hasta en marzo de 1981.

Al igual que la DUDH, este pacto reconoce y garantiza los derechos de protección, participación y acceso que tienen las personas. El artículo 26 del PIDCP consagra el derecho de protección sin discriminación y con igualdad ante la ley (Naciones Unidas, Derechos Humanos, 1966).

La garantía de participación y de acceso a los asuntos públicos se reconoce en el artículo 25 del PIDCP. En él se establece que todos los ciudadanos gozan sin distinciones ni restricciones indebidas del derecho a participar en la dirección de cargos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, reconoce

el derecho a votar y ser elegido por sufragio, lo que obliga a los Estados a garantizar la participación de la mujer en los procesos democráticos para la renovación de los poderes públicos. Así mismo, el artículo de referencia, contempla la garantía de acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Otro de los significativos instrumentos internacionales de protección y participación de la mujer, como garantía de acceso a la justicia, es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, al igual que el PIDCP, se firmó el 16 de diciembre de 1966. Este pacto compromete a los Estados parte a garantizar el ejercicio de los derechos por él enunciados sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo o cualquier otra condición social; así como a adoptar medidas para lograr la progresividad, inclusive legislativa, para la plena efectividad de los derechos reconocidos. Este pacto considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona y de sus derechos iguales e inalienables.

El artículo 3 del PIDESC protege el derecho de igualdad y compromete a los Estados a “asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto”, como garantía para proteger la participación de la mujer en el sector económico, social y cultural. No obstante, el artículo 15 del propio ordenamiento es más específico pues reconoce expresamente el derecho de participación en la vida cultural de los Estados.

El PIDESC excluye el reconocimiento expreso del derecho de acceso, sin embargo, se puede considerar que dicha garantía se hace efectiva al imponer la obligación a los Estados de adoptar medidas legislativas que progresivamente establezcan la plena efectividad de los derechos de las personas declarados en el mismo, sin discriminación.

Los instrumentos internacionales abordados comprometen a los países adheridos a establecer mecanismos de protección y participación de la mujer para garantizar el acceso a la justicia, considerada esta como las mismas oportunidades para desempeñarse en igualdad de circunstancias

en los aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda sociedad, independientemente de la forma de gobierno de sus países.

La participación de la mujer en el contexto internacional se analiza desde la participación en la composición general de la organización de Naciones Unidas y en cargos públicos relevantes en la toma de decisiones como los puestos de jefas de Estado y la pertenencia a órganos legislativos y de impartición de justicia.

En 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de tomar medidas ante los problemas que enfrenta la humanidad, entre ellos, proteger los derechos humanos, mantener la paz y la seguridad internacional. Actualmente la ONU tiene representación de 193 países, y los principales órganos que la conforman son: las Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.

La participación de la mujer dentro de la Asamblea General ha sido muy baja; desde 1946 hasta el día de hoy, se ha integrado la presidencia en 74 sesiones, de las cuales 4 veces fue presidida por mujeres, lo que representa un 5,4% de participación de mujeres que han ocupado el cargo de presidentes. De los 193 países que integran la Asamblea General, 154 son hombres y solo 39 son mujeres, lo que representa un 20,2% de participación femenina en la toma de decisiones dentro del máximo órgano de las Naciones Unidas. Este porcentaje de participación de la mujer contrasta con el compromiso que tienen los Estados para promover la participación de la mujer en condiciones de igualdad, conforme la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948.

La Corte Internacional de Justicia también tiene baja participación de mujeres. Desde su constitución al 2015 solo han ocupado el cargo de juezas, 4 de los 106 integrantes (Krsticevic, 2015).

La participación de la mujer en el desempeño de cargos públicos relevantes en la toma de decisiones dentro de los países, como los puestos de jefas de Estado, pertenencia en órganos legislativos y de impartición

de justicia, han logrado avances significativos. Sin embargo, tienen una representación similar a la de la ONU.

La figura de Jefa de Estado en el contexto internacional es muy escasa, ya que a marzo de 2019, de 193 países solo 10 han sido liderados en algún momento por mujeres, lo que representa un 5,18% del total (Organización de Naciones Unidas, 2019).

En cuanto a la participación de mujeres en órganos legislativos de los Estados pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) se tienen avances importantes, con independencia de su denominación, ya sea Asamblea, Congreso, Parlamento, entre otros, y de su conformación unicameral o bicameral; la mayoría de ellos incluye en sus curules la participación femenina. De 47.784 escaños, 11.125 son ocupados por mujeres y 36.659 por hombres, lo que representa un 23,28% de participación en órganos importantes para la toma de decisión.

La información sobre la participación en órganos constitucionales de impartición de justicia garantes de los Derechos Humanos dentro de cada uno de los Estados, es escasa. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe afirma que 7 de 29 países de dicha región, registraron avances en la presencia de mujeres en las Cortes Supremas respecto del año anterior (OIG,2019).

El estudio realizado por dicho Observatorio permite apreciar que el 21% de los participantes en las Cortes Supremas son mujeres, lo que confirma la desigualdad en la ocupación de cargos públicos importantes para la toma de decisiones que propicien el acceso a la justicia de las mujeres.

## **Protección y participación de la mujer en Colombia**

La protección a la mujer en Colombia se garantiza a través de los diferentes instrumentos jurídicos del ámbito nacional e internacional. La Constitución Política de Colombia (1991) es “norma de normas”, lo que la convierte en el máximo ordenamiento jurídico nacional que contempla la

participación y protección de la mujer; en ella, se contienen 380 artículos y 66 artículos transitorios. Si bien es cierto que en estos preceptos de la Constitución se establecen principios fundamentales generales para el funcionamiento de sus órganos y para la protección de los derechos de las personas sin realizar diferencia por cuestiones de género, también es cierto que, por idiosincrasia mundial, el género masculino predomina en el desempeño de cargos públicos; por lo que, la Constitución en cuatro artículos, garantiza el acceso a la justicia de las mujeres y reconoce esencialmente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, tanto para participar en la conformación, ejercicio y control del poder político como para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. De esta manera obliga a las autoridades a garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.

La Constitución de Colombia amplía la protección de los derechos de la mujer al reconocer, en su artículo 93, los Derechos Humanos establecidos en tratados y convenios internacionales y ratificados por el gobierno colombiano; incluso, va más all, al aceptar la existencia de los derechos que no figuren en la propia Constitución y en los instrumentos internacionales. Además del reconocimiento de derechos en la Constitución, el Estado colombiano organiza y divide el poder público en legislativo, ejecutivo, judicial y en organismos autónomos que colaboran en el cumplimiento de los fines de garantizar la unidad de la nación, y asegurar a sus integrantes la vida, la justicia, la igualdad y los diversos derechos que otorgan protección a la participación de la mujer como garantía de acceso a la justicia.

Entre otros instrumentos jurídicos que ofrecen protección y garantizan la participación como pleno acceso a la justicia de la mujer en Colombia, se encuentran fundamentalmente 6 instrumentos jurídicos.



**Tabla 1.**

*Instrumentos nacionales de protección y participación de la mujer en Colombia*

Año	Ley	Generalidades
2000	581	Crea mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, para que promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil (Ley 581, 2000, art.1).
2008	1257	Adopta normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de políticas públicas para su realización (Ley 1257, 2008, art. 1).
2011	1434	Fomenta la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa y de control político a través de la creación de la comisión legal para la equidad de la mujer del Congreso de la República (Ley 1434, 2011, art. 1).
2011	1468	Establece derechos y garantías en el ámbito laboral para gozar de la maternidad y paternidad sin perder la relación laboral.
2018	1900	Promueve la equidad en el acceso a la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación (Ley 1900, 2018, art. 1).
2019	1955	Establece el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, mediante el cual se sientan las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para los colombianos (Ley 1955, 2019, art. 1).

Elaboración propia.

La participación de la mujer en corporaciones u organismos públicos de Colombia es muy baja y en algunas ramas del poder público es nula; como es el caso del Ejecutivo, donde el 100% de los presidentes han sido hombres (1886-2019).

En la rama legislativa, la participación de la mujer se da por primera vez en 1962, con la representación de la Senadora Berta Fernández de Ospina (Senado de la República, 2019). Actualmente (2019) el Senado se conforma por 106 integrantes, de los cuales el 21,69% son mujeres, es decir, hay una participación de 23 senadoras. La Cámara de Representantes la conforman 172 miembros, de los cuales 31 son mujeres, lo que representa un 18% de mujeres participando en la toma de decisiones dentro de esta Cámara. Es de resaltar que ambas Cámaras son presididas por el género masculino y, en total, las mujeres representan un 19,43% de representación en la rama legislativa. Dentro de esta rama del poder público, se constituyó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la cual está integrada por 19 congresistas: 10 por parte de la Cámara de Representantes y 9 por el Senado de la República.

Llama la atención que históricamente la participación de la mujer es del 94,74% en dicha Comisión y solo el 5,26% de representación masculina; lo que contrasta con los diversos principios fundamentales que buscan la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad para garantizar el acceso a la justicia.

En la rama judicial, la participación de la mujer sigue siendo menor al 50% que garantiza el acceso pleno a la justicia. De conformidad con la Constitución de Colombia, esta rama está conformada por miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La Corte Suprema está integrada por 23 magistrados (Ley 270, 1996, art. 17), de los cuales 3 son mujeres; lo que representa un 13,04%. La Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados (Ley 270, 1996, art. 44), con participación de 3 mujeres; lo que significa una presencia de 33,33% mujeres. Y, el Consejo de Estado está integrado por 31 consejeros (Ley 270, 1996, art. 34), de los cuales 7 son mujeres; lo que equivale a 22,58%. En total, en los órganos principales de la rama judicial se tiene una participación del 20,63% de mujeres.

En Colombia, la educación es ofrecida por instituciones educativas del Estado y por particulares. La sociedad es responsable de la educación junto con la familia y el propio Estado, y tiene la obligación de colaborar

en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de la función social (Ley 115, 1994, art. 8).

La educación superior se regula mediante la Ley 30 de 1992. Dicha ley establece la obligación a las instituciones de proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados, así como tener un reglamento estudiantil que regule la admisión, derechos y obligaciones, y el régimen disciplinario, entre otros aspectos. Es decir, las instituciones deben garantizar la protección y participación a través de sus propios reglamentos, los cuales deben generar mecanismos para asegurar el pleno acceso de la mujer a la justicia.

El Ministerio de Educación Nacional es la autoridad encargada de verificar las condiciones bajo las cuales se ofrece la educación superior (Decreto 2566, 2003, art. 43) tanto de instituciones públicas como privadas. En dicho Decreto se establecen, entre otros aspectos, las condiciones mínimas de calidad para las instituciones educativas. La capital de Colombia cuenta con 62 universidades, de las cuales 55 son privadas y 7 son públicas. Actualmente en el país se ofrecen 278 programas educativos de licenciatura en Derecho, de los cuales el 19,78% se imparte en su capital (Ministerio de Educación Nacional, 2017).

En el año 2016, el número de inscritos a programas de educación superior fue 1.163.889, de los cuales 550.045 fueron hombres y 613.844 mujeres; lo que representa una participación de mujeres dentro de la educación superior del 52,74% de los estudiantes.

La protección y participación de la mujer en el ámbito de acceso a la educación superior se encuentra garantizada a través de instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, así como con políticas públicas que fomentan el acceso de las mujeres a la justicia. Sin embargo, se debe impulsar la participación de la mujer en cargos de dirección y toma de decisiones para garantizar el pleno acceso a la justicia.

## Protección y participación de la mujer en México

En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se establece que toda persona gozará de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México, así como de las garantías para su protección. Se infiere que debe haber igualdad de protección, participación y acceso a la justicia. No obstante, dentro de los 136 artículos y 19 transitorios, se hace una distinción explícita de género en 7 artículos, resultado de las prácticas culturales y políticas que se han dado en el Estado.

Resaltamos los artículos 34 y 115, en los que se reconocen los derechos de la mujer como ciudadana. Estos artículos traen consigo la protección de estos derechos e incorporan a su ordenamiento una serie de instrumentos jurídicos a nivel internacional y nacional que garantizan la participación de las mujeres y la existencia de políticas sociales que las proteja de manera íntegra y digna. De igual manera, facilitan el acceso de justicia ante cualquier vulneración de sus derechos.

Dentro de los instrumentos jurídicos a nivel nacional que garantizan la igualdad de género se encuentra la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001) que promueve y fomenta la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros.

Posteriormente, se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) con la finalidad de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en los diferentes espacios sociales.

Dentro de este compendio normativo también está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), cuya finalidad es la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018).

Dichas normas federales dan cumplimiento al precepto constitucional y sirven de referente para establecer las normas y políticas públicas que garanticen la igualdad de género en los 32 Estados de la República.

Como antecedente en la historia mexicana se encuentran representantes de la búsqueda de equidad de género a Hermilia Galindo y a Elvia Carrillo.

En su lucha no estuvieron solas. Las acompañaron hombres que creían en la igualdad de género y en la importancia de que las mujeres ocuparan cargos de responsabilidad en diferentes escenarios, para avanzar hacia un nuevo orden social. Como ejemplo, el general Salvador Alvarado, gobernador del Estado de Yucatán, quien realizó y lideró el Primer Congreso Feminista de México en 1916, dejando como legado la frase “mientras no elevemos a la mujer, nos será imposible ser patria”(Elizondo, 2018).

Los resultados obtenidos en este Congreso fueron tomados para la regulación de la Constitución Estatal en 1923. Posteriormente, se sumaron a esta batalla cultural y social el Estado de San Luis de Potosí y el Estado de Chiapas (Alejandre y Torres, 2016).

Sin embargo, la reforma constitucional de la Unión se dio hasta 1953, por exigencia de las mujeres, al presidente Adolfo Ruiz Cortines (Tuñón, 1987). Esta reforma constitucional fue la base para garantizar y generar instrumentos jurídicos que permitieron un cambio social.

Si se observa el panorama actual de participación de la mujer en entidades públicas, hay que señalar que hasta la fecha no se ha contado con una mujer como Presidente. También ha disminuido su participación política. Según las cifras del 2018 -2019 aportadas por el Instituto Nacional de Mujeres:

La distribución por sexo de Secretarías de Estado muestra que en 2018 solo el 16,67 del total eran dirigidas por mujeres. En la actual legislatura de la Cámara de Senadores, las mujeres representan 50,8 % de un total de 128 senadores. En la misma legislatura de la Cámara de Diputados, la representación femenina correspondió a 48,2% de 500 diputados. En el 2019, la representación femenina entre los Diputados locales fue de

49,2%; las síndicas representaron 39,52% del total, mientras que las regidoras 40,5%. También en las instancias de gobierno de mayor cercanía con la población como las presidencias municipales, la participación de las mujeres es mínima, 22,77 % en 2019.

Cabe resaltar que la participación en estos escenarios obedece al cumplimiento de la cuota obligatoria de participación de la mujer exigida a los partidos políticos, de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y la Sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida el 30 de noviembre de 2011.

La participación de la mujer en el poder judicial es mínima. Como ejemplo puede tomarse la misma constitución de la Suprema Corte de Justicia de la nación, integrada por 11 ministros, de los cuales solo 2 son mujeres, correspondiendo esta participación al 18,1%.

Por otro parte, la Universidad de Guadalajara, de manera estatal, ha constituido la Defensoría de Derechos Universitarios, que tiene como misión el respeto a los Derechos Humanos de la comunidad universitaria, y está basada en acciones de Prevención y Atención a la violencia. Según estadísticas presentadas por el doctor Dante Haro en la apertura de esta oficina -Campus Costa Sur- en el 92% de las denuncias presentadas ante esta entidad entre 2018 y 2019, las víctimas fueron mujeres. Resultado de la cultura patriarcal.

## Conclusiones

La protección de la mujer en el ámbito internacional se encuentra garantizada a través de mecanismos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros; sin embargo, su participación en órganos de toma de decisiones es muy baja, por lo que, además de establecer normativamente el reconocimiento de derechos, se deben establecer

políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres en los diferentes cargos públicos de los Estados.

Las Constituciones de Colombia y México establecen principios fundamentales generales para la integración y funcionamiento de sus órganos, así como para la protección de los derechos de las personas, sin realizar diferencia por cuestiones de género; sin embargo, por idiosincrasia y tradición, el género masculino predomina en el desempeño de cargos públicos. De allí que, desde la Constitución, se garantiza el acceso de las mujeres a la justicia y se reconoce, esencialmente, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. De esta manera se obliga a las autoridades a garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los diferentes ámbitos laborales y niveles decisorios de la administración pública.

## Referencias

- Alejandro, G. y Torres, E. (2016). *El Primer Congreso Feminista de Yucatán 1916. El camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres. Construcción y tropiezos*. México: UNAM.
- Asamblea Nacional Constituyente (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá, Colombia: Legis [2ª ed.].
- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018). *¿Qué es el sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres?* Recuperado de <https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-sistema-nacional-de-prevencion-atencion-sancion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres?idiom=es>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). México: Nostra ediciones.

- Decreto 2566 del 2003 [con fuerza de ley]. Condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. 10 de septiembre del 2003. Diario oficial 45.308. Colombia.
- Elizondo, R. (2018). *Violencia política contra la mujer una realidad en México*. México: Porrúa.
- Flores, E. (marzo-septiembre, 2006). Impartición discriminatoria de la justicia. *Revista Letras Jurídicas*. 2,1-23.
- Instituto Nacional de Mujeres, Inmujeres (2019). *Indicadores básicos*. Recuperado de [http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos\\_download/MHM\\_2018.pdf](http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2018.pdf)
- Krsticevic, V. (2015). *Paridad de género en los tribunales y órganos internacionales: un avance posible con impacto global*. Campaña por la paridad de género en la representación Internacional (GQUAL). Recuperado de <http://www.gqualcampaign.org/wp-content/uploads/2016/02/FINAL-2015-12-04-ESP-Documento-GQUAL.pdf>
- Ley 270 de 1996. Ley estatutaria de la administración de justicia. 7 de marzo de 1996. Diario oficial 42.745. Colombia.
- Ley 30 de 1992. Ley que organiza la educación superior. 28 de diciembre del 1992. Diario Oficial 40.700. Colombia.
- Ley del Instituto Nacional de las mujeres 2001. 12 de enero del 2001. Diario oficial federal 12-01-2001. México
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2006. 2 de agosto del 2006. Diario oficial federal 02-08-2006. México.
- Ministerio de Educación Nacional, MEN (2017). *Anuario estadístico de la educación Superior Colombiana*. Bogotá, Colombia: MEN.
- Organización de Naciones Unidas (12 de marzo de 2019). De 193 países, sólo 10 están gobernados por mujeres. *Noticias ONU*. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2019/03/1452691>